



[Versión imprimible](#) | [Suscripción gratuita](#) | [Números anteriores](#)

también disponible en [francés](#), [portugués](#) e [inglés](#)

Número 173 - Diciembre 2011

Les solicitamos su colaboración para evaluar el Boletín del WRM. L@s invitamos a contestar la encuesta en: https://www.surveymonkey.com/s/Boletin_WRM

EL FOCO DE ESTE NÚMERO: DERECHOS HUMANOS

El 10 de Diciembre se conmemora la adopción y proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

No obstante, en muchos países, las personas aún continúan sufriendo violaciones a los derechos humanos y están luchando para defender su tierra, agua, bosques, medios de vida, y cultura, contra el acaparamiento de tierras.

La historia de la lucha a favor de los derechos humanos aún está siendo escrita.

NUESTRA OPINIÓN

- [El Año Internacional de los Bosques se termina: ¿qué celebrar?](#)

DERECHOS HUMANOS

- [La Marcha Mundial de las Mujeres: fortaleciendo la lucha](#)
- [Llamamiento para la creación de la Alianza Global contra el Acaparamiento de Tierras](#)
- [Desde Durban: llamado a una moratoria a REDD+](#)
- [Mega-emprendimientos y criminalización de la lucha por derechos, el caso de India y Honduras](#)
- [Crisis de derechos humanos en plantaciones de palma aceitera de Indonesia](#)
- [El clima, los derechos humanos y los bosques en Tailandia](#)

NOTICIAS BREVES

- [Denuncia contra el fondo de pensiones holandés -ABP- por invertir en monocultivos de árboles en Mozambique](#)
- [Desgracia anunciada para el Extremo Sur, el Sur y el Sudoeste de Bahía](#)
- [Llamado a la movilización y coordinación de las luchas camino a Río+20 y más allá](#)
- [El proyecto piloto REDD de Conservation International: una producción inédita de Disney](#)
- [Bosques. Mucho más que una gran cantidad de árboles](#)

NUESTRA OPINIÓN

- El Año Internacional de los Bosques se termina: ¿qué celebrar?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a este año 2011, Año Internacional de los Bosques. Considerando que este año se termina, es bueno hacer un breve balance.

El lema de este Año Internacional es 'los bosques, para las personas'. En enero escribimos: ¿será que los pueblos del bosque tienen motivo para 'celebrar'? ¿Será que en este año hubo adelantos en el combate a las causas directas de la deforestación, como la extracción de madera y el avance del agronegocio? ¿Qué decir de las causas llamadas indirectas o subyacentes, o sea, aquellas que están detrás de la destrucción forestal, como es el caso de una economía movida por el lucro y la especulación financiera, y un consumo excesivo que beneficia solamente a una minoría de la humanidad?

REDD+

Lo que dominó nuevamente la agenda de los bosques fue el debate sobre el mecanismo REDD+. Los intentos de avanzar con la implantación del REDD+ movieron a bancos, consultores, gobiernos e incluso a muchas ONGs. Ya se gastaron miles de millones de dólares en este proceso, algo que fue denunciado por un grupo de organizaciones, entre ellas organizaciones indígenas (1). Son recursos que podrían ser utilizados para incentivar y multiplicar las experiencias positivas de conservación de los bosques y respeto por los derechos humanos en todo el mundo, no vinculadas al mecanismo REDD+.

Llama la atención la 'ceguera' de aquellos que más insisten en promover REDD+, como el Banco Mundial y diversas empresas consultoras. No parecen percibir las pruebas de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en zonas donde se implementan proyectos piloto de REDD+, como mostró el estudio de caso de un proyecto de Conservación Internacional y Walt Disney en el Congo, realizado por el WRM (2) (publicado en francés e inglés y recientemente también en castellano), así como otros estudios. Tampoco perciben que cada vez más estudios anuncian que REDD+ no va a funcionar debido a serios obstáculos, principalmente en cuanto mecanismo de mercado (3). Los problemas detectados culminaron en una propuesta, lanzada en Durban durante la COP17 por organizaciones indígenas, de declarar una moratoria al REDD (ver artículo en este boletín).

Mientras Brasil busca presentarse como protector del mayor bosque tropical del mundo, un grupo de parlamentarios de ese mismo país, vinculado al agronegocio, intentó modificar este año el Código Forestal, abriendo el camino para una deforestación legal de millones de hectáreas para beneficiar, principalmente, al agronegocio, mientras la recuperación se plantea a través de proyectos REDD+ y el pago por servicios ambientales, temas para los cuales se están elaborando rápidamente legislaciones específicas. La apuesta a una 'economía verde', basada en la mercantilización y el control sobre la naturaleza y el territorio, tiende a provocar un retroceso en los derechos legalmente garantizados de las poblaciones

indígenas y tradicionales de Brasil.

El agravamiento de la contaminación, consecuencia de este modelo, intensifica también la contaminación provocada por las grandes corporaciones transnacionales en el Norte, lo que implica más impactos para las poblaciones indígenas y otros sectores que viven alrededor de esas industrias y sus zonas extractivas en el Norte, intensificando el racismo y otras injusticias ambientales y sociales. En el Sur también significa, a mediano y largo plazo, impactos negativos para los bosques tropicales, haciendo de REDD+ un proceso contraproducente, incluso para aquellos que piensan que el 'bosque en pie' y un cierto control sobre el mismo garantizarán su futuro.

Faltan propuestas estructurales para atacar las causas directas e indirectas de la deforestación. Las que hay, continúan siendo consideradas por los gobiernos y sus interlocutores como muy 'radicales'. Pero sin esas propuestas 'radicales' el clima sufrirá un aumento de temperatura de cerca de 4 grados en poco tiempo (4). Eso sí significa un cambio realmente radical en la vida de centenares de millones de personas en todo el mundo, principalmente mujeres, más vulnerables a los cambios climáticos.

La definición de bosques

Otro factor que incentiva la deforestación es, sin dudas, la definición de bosques de la FAO, que llama bosques a los monocultivos de árboles. El WRM realizó una mini campaña intensa sobre el tema este año, elaborando herramientas y entregando una carta a la FAO en setiembre en la que exhortaba a la organización a iniciar urgentemente un proceso de revisión de esta definición, con participación efectiva de los pueblos del bosque.

Puede ser que la lucha contra la definición actual de los bosques haya tenido algún eco durante la COP 17 en la recomendación realizada por el SBSTA (5), el órgano asesor de la Conferencia de las Partes, en el marco del debate sobre REDD. El SBSTA sugiere que cada país pueda hacer su propia definición del bosque, diferente de una definición única por parte de la UNFCCC. Aunque por una parte esto abre el espacio para luchar en cada país por definiciones que excluyan a los monocultivos de árboles y contemplen mejor la realidad local de los bosques, por otro lado abre también una brecha para que se formulen definiciones que promuevan todavía más el avance de los monocultivos.

La última opción es la más probable, debido al gran poder de lobby de las empresas del sector y de las instituciones financieras que incentivan las plantaciones de árboles ante los gobiernos nacionales, cuyos representantes están acostumbrados a que sus campañas electorales sean financiadas por las empresas forestales, y de los cuales las empresas consiguen obtener, a modo de 'intercambio', tierras, ventajas e incentivos. Sin una definición y referencia clara a escala internacional, la puerta está abierta para definiciones que atiendan aún mejor los intereses corporativos.

La falta de interés en abordar las causas subyacentes de la deforestación se vuelve todavía más evidente si consideramos el avance en los planes de las falsas

soluciones para la crisis del clima. Un ejemplo de ellas es la utilización de agrocombustibles, en especial la biomasa de madera, para generar energía en Europa. Se trata de un intento por mantener el actual sistema insustentable de producción y consumo, recurriendo nuevamente a los sistemas de certificación como el FSC para los monocultivos de eucalipto y pino, y RSPO para las plantaciones de palma para producción de aceite de palma. Ninguno de los dos sistemas de certificación evita que haya graves violaciones de los derechos humanos, como lo demuestra, por ejemplo, el artículo de Indonesia en este boletín. Los gobiernos prefieren atender intereses corporativos y bancarios, que preocuparse por el bienestar y futuro de las personas y del ambiente, incluso del clima. Buscan enfrentar la crisis económica con los mismos moldes de siempre, sin preocuparse por establecer límites a la explotación de la naturaleza o que los grandes contaminadores reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero.

La resistencia

Tendríamos poco para celebrar este año si no hubieran ocurrido profundos cuestionamientos al 'lavado verde' de los sellos de certificación, como el del FSC, en los países del Norte (6) y, principalmente, si no fuera por la resistencia de los pueblos de los bosques y de otros biomas que han luchado en varios países del Sur contra la deforestación y han resistido en zonas donde los gobiernos incentivaron la plantación de monocultivos de árboles y otras formas de usurpación de tierras.

Se vuelve cada vez más evidente que es necesario reconocer los derechos de esas poblaciones, sino se perpetuará la violación de sus derechos y la criminalización de quienes solamente luchan por su defensa, algo que ocurre en muchos países, desde Chile en las zonas de monocultivos de pinos, hasta Indonesia, en torno a las plantaciones de eucalipto y de palma africana. Respetar los derechos de los pueblos que habitan y dependen de bosques y de otros biomas es la mejor forma de conservar los bosques, reducir el impacto de los cambios climáticos y promover la seguridad y soberanía alimentarias.

Para avanzar en ese camino creemos que una tarea fundamental es incentivar y articular los más diversos procesos de resistencia, desde la lucha por la conservación de los bosques hasta la lucha contra el sistema financiero internacional, creando lazos de solidaridad entre los pueblos del Sur y también con los pueblos del Norte y aumentando así la presión sobre empresas y gobernantes.

Es importante que la voz de los diferentes pueblos, contraria a la privatización y a la apropiación de las tierras y de la naturaleza y a favor de sus derechos humanos básicos, tenga un eco más fuerte y articulado en los próximos grandes eventos, como Rio +20 (ver la convocatoria de Rio +20 en este boletín). Y finalmente, reforzamos también el llamamiento global de La Vía Campesina, lanzado el mes pasado en Malí, África, contrario al proceso de acaparamiento de tierras (ver también artículo sobre acaparamiento de tierras en este boletín).

1- <http://www.wrm.org.uy/temas/REDD.html>

2- http://www.wrm.org.uy/countries/Congo/REDD_DRC_sp.pdf

3- <http://www.fern.org/carbonmarketswillnotdeliver>

4- <http://outrapolitica.wordpress.com/2011/11/17/a-un-ano-de-cancun-y-dias-de-durban-mas-de-40-c/>

5- <http://www.redd-monitor.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/12/l25a01.pdf>

6- Como fue el caso del FSC en Bélgica, a partir del caso de Veracel Celulose en Brasil (ver <http://www.duurzaamoppapier.be>)

[inicio](#)

DERECHOS HUMANOS

- La Marcha Mundial de las Mujeres: fortaleciendo la lucha

Para el WRM, la lucha de las mujeres es una lucha por libertad y justicia social. Esencialmente, es una demanda por cambios en las estructuras sociales que han ubicado a la mujer en una posición desigual y subordinada. Es así que la lucha por la justicia de género se convierte en una lucha social contra el sistema capitalista y patriarcal dominante, que trata a las mujeres y a la naturaleza de manera similar, ejerciendo violencia contra los cuerpos y las vidas de las mujeres para controlarlas, y contra los bienes comunales como el agua, la tierra, la soberanía e incluso la propia cultura, en su carrera insaciable por la apropiación y el lucro.

La Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) es un movimiento de mujeres de diversos orígenes y filiaciones que, organizadas en grupos de base y organizaciones, luchan a favor de la eliminación de las causas que originan la pobreza y la violencia contra las mujeres, causas que identifican como inherentes al actual sistema capitalista y patriarcal.

Las acciones de los grupos que conforman la MMM giran en torno tanto a una agenda feminista como a las reivindicaciones de otros movimientos sociales, lo que hace que la MMM esté inmersa así en las luchas contra la militarización, el libre comercio o las falsas soluciones al cambio climático y a la crisis sistémica.

Del 21 al 25 de noviembre de 2011, bajo el lema "Mujeres en marcha: reforzar la acción colectiva, cambiar el mundo", 80 mujeres provenientes de 34 países, incluidas delegadas, trabajadoras e integrantes de movimientos aliados, se reunieron en ocasión del VIII Encuentro Internacional en Quezon City, Filipinas, para analizar la situación actual y discutir estrategias.

El texto para el debate elaborado por el Comité Internacional de la MMM para el VIII Encuentro Internacional (1) transmite la idea de que la lucha por la integridad de la mujer es una lucha por justicia social y derechos humanos. Refleja que "la crisis financiera, el desempleo, el endeudamiento en los países del norte crearon posibilidades de cuestionamiento del modelo y del discurso neoliberal, así como de incremento de movilizaciones sociales. Al mismo tiempo, prevalece un retorno de las políticas neoliberales con la utilización de sus mismas viejas recetas, por ejemplo, los recortes de servicios públicos, ataques a los derechos de las trabajadoras, manteniendo y aumentando la tasa de ganancia de las empresas, incluso las financieras, y los presupuestos militares. Aumenta la presión sobre 'activos reales' como las tierras y los activos fijos resultando en un acaparamiento

de los territorios de campesinas, indígenas y pueblos tradicionales”.

Con relación a la posición que ocupa la mujer, el documento analiza cómo “el trabajo realizado por las mujeres, en las múltiples formas que éste pueda tener, está en el centro de la organización económica y mercantil de la sociedad en el sistema capitalista, racista y patriarcal. Las mujeres siguen siendo las responsables del trabajo de cuidados - sea en el hogar, en las comunidades, en el sector de servicios - reproduciendo el modelo que la sociedad capitalista y patriarcal les ha históricamente asignado. Ellas representan la mayoría en áreas que sostienen a comunidades enteras, por ejemplo en la producción agrícola y campesina, en la pesca artesanal y en las manufacturas de pequeña escala. Y también en la producción económica integrada al mercado globalizado, como la costura, la industria del calzado, la agroexportación, y todos aquellos sectores con uso intensivo de mano de obra”.

La división sexual del trabajo asigna el trabajo productivo (producción de mercancías) a los hombres y el trabajo reproductivo (el cuidado de las personas) a las mujeres, estableciendo una jerarquía por la cual el primero es más importante que el segundo. El documento pone de manifiesto cómo el actual modelo capitalista neoliberal “somete la relación de cuidados y entre las personas a las reglas del mercado, basadas en la eficiencia y eficacia para aumentar las ganancias. Esta tensión es aún más evidente en la privatización de los bienes comunes, como los servicios públicos de salud, educación y de distribución del agua. Frente a la inexistencia y al debilitamiento planificado de servicios públicos o comunitarios para el cuidado de las personas (niños, enfermos o ancianos), las mujeres son las que asumen individualmente esta tarea históricamente invisible y sin remuneración”. Incluso en el debate sobre la crisis, las mujeres permanecen invisibilizadas: “el desempleo masculino es enfatizado y se ignora que las mujeres sólo mantuvieron sus empleos porque su inserción en el mercado de trabajo siempre se dio con el no reconocimiento de sus derechos y con salarios menores”.

La violencia es otro instrumento que sirve para el control de las mujeres, y el documento para el debate menciona el acoso sexual utilizado por los hombres para controlar el trabajo de las mujeres en las maquilas, así como la violencia sexual usada para castigar a las mujeres que reclaman sus derechos, o como una forma de sembrar el terror. Esa violencia se ha incrementado con la actual militarización creciente en todos los continentes, que es utilizada para aumentar el control sobre los territorios (incluida el agua, las tierras agrícolas, los recursos minerales y la diversidad biológica), y que supone hasta violaciones y persecuciones de las mujeres que participan en movimientos sociales.

Con relación a la crisis ambiental, el documento del Comité Internacional de la MMM subraya cómo el mercado se presenta como una solución, como el “derecho” a contaminar, transformado en créditos en el mercado de carbono que luego se negocian en la bolsa. El mecanismo REDD (Reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques) también fue estudiado por el documento, que concluye que los proyectos REDD aumentan el poder de los gobiernos, las empresas privadas y algunas grandes ONGs, en la medida que toma control sobre los bosques, ignorando y excluyendo a los pueblos originales que

han vivido allí durante generaciones.

La MMM llama a las mujeres a fortalecer la acción política para recuperar no solamente el territorio de las mujeres - sus cuerpos y tierras - sino también el agua, la biodiversidad y la cultura de quienes han vivido por generaciones en dichos territorios.

El encuentro finalizó con una marcha colorida, multitudinaria e internacional reclamando el cese de la violencia contra la mujer, lo que incluye, en Filipinas, el retiro de las bases militares estadounidenses.

(1) Artículo basado en el texto elaborado por el Comité Internacional de la MMM para su debate en el VIII Encuentro Internacional, http://www.worldmarchofwomen.org/structure/8rencontre/context/es/base_view

[inicio](#)

- Llamamiento para la creación de la Alianza Global contra el Acaparamiento de Tierras

El proceso de acaparamiento de tierras está sucediendo a escala global y se ha intensificado a partir de las crisis alimentaria, climática y financiera que han creado los grandes capitalistas con sus propias políticas neoliberales. Ahora, los mismos que crearon las crisis han puesto la mira en los bienes naturales y los territorios, en lo que constituye una nueva fase de expansión del capitalismo con el objetivo de lograr el control de los bienes naturales del planeta.

El acaparamiento de tierras va en línea con el modelo de desarrollo industrial basado en la gran escala, que ya ha provocado numerosos impactos negativos sobre las comunidades y los ecosistemas. Por lo tanto, la lucha para frenar el acaparamiento de tierras es urgente. Se trata de una lucha entre el modelo industrial versus el modelo campesino e indígena. Se trata de la defensa del derecho básico a la tierra, al territorio, a poder producir alimentos. Se trata de la defensa de el derecho a la soberanía alimentaria.

Es por este motivo que La Vía Campesina organizó en Nyéléni (Mali) un encuentro histórico en el que participaron alrededor de 300 personas con el objetivo de intercambiar experiencias acerca de lo que está sucediendo a escala mundial con relación al acaparamiento de tierras. Desde allí se lanzó un llamamiento para la creación de una Alianza Global contra el Acaparamiento de Tierras. A continuación l@s invitamos a leer la declaración de la reunión y a adherir al llamamiento:

Declaración de la Conferencia

Detengamos el acaparamiento de Tierras, ya!

Nosotros, campesinas y campesinos, pastores, pueblos indígenas y nuestros aliados reunidos en Nyeleni del 17 al 19 de noviembre de 2011, hemos venido de

todas partes del mundo para compartir por primera vez nuestras experiencias de lucha contra el acaparamiento de tierras. El año pasado apoyamos el Llamamiento de Kolongo de las organizaciones campesinas de Malí que han tomado el liderazgo en organizar la resistencia local al apoderamiento de las tierras campesinas en África. Hoy, hemos venido a Nyeleni a dar respuesta al Llamamiento de Dakar que convoca una alianza global contra el acaparamiento de tierra pues estamos decididos a defender la soberanía alimentaria, los bienes comunes y el derecho a los recursos naturales de los/as productores/as de alimentos a pequeña escala.

En Malí, el gobierno se ha comprometido a entregar 800 mil hectáreas de tierra a inversionistas empresariales. Se trata de tierras que han pertenecido a las comunidades durante generaciones, incluso siglos, mientras que el Estado de Malí existe sólo desde los años 1960. Despojar a las comunidades de sus tierras es una violación de sus derechos históricos y consuetudinarios.

El acceso seguro y el control de la tierra y los recursos naturales están íntimamente ligados al disfrute de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos - y en otros tratados regionales e internacionales - tales como el derecho a la libre determinación, el derecho a un estándar adecuado de vida, a vivienda, a alimentación, a salud, a la cultura, la propiedad y la participación. Constatamos con suma preocupación que los Estados no cumplen con sus obligaciones en esta materia y ponen los intereses de negocios por encima de los intereses de los pueblos.

El acaparamiento de tierras es un fenómeno global promovido por las élites y los inversionistas locales, nacionales y transnacionales, y los gobiernos con el objetivo de controlar los recursos más preciados del planeta. Las crisis alimentarias, financieras y climáticas globales han desatado un apuro entre inversionistas y gobiernos pudientes por adquirir y apropiarse tierras y recursos naturales ya que éstos son los únicos puertos a salvo que quedan para garantizar rendimientos financieros. Fondos de pensiones y otros fondos de inversión se han convertido en poderosos actores en el acaparamiento de tierras, al mismo tiempo que sigue habiendo guerras para apoderarse del control de las riquezas naturales.

El Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de la tierra y el agua al promover políticas y leyes convenientes a las corporaciones empresariales, al facilitar acceso a capital y garantías para los inversionistas, y al fomentar un modelo de desarrollo económico extractivo y destructivo. El Banco Mundial, el FIDA, la FAO y la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo han propuesto siete principios que legitiman el acaparamiento de tierra por parte de empresas comerciales y estados inversionistas. Dirigida por varias de las corporaciones transnacionales más grandes, la Alianza por la Revolución Verde en África apunta a transformar la agricultura campesina en agricultura industrial y a integrar a los/as campesinos/as a las cadenas globales de valor aumentando así enormemente su vulnerabilidad al despojo de tierras.

El acaparamiento de tierras va más allá de las estructuras imperialistas tradicionales Norte-Sur; las corporaciones transnacionales pueden tener sus sedes en Estados

Unidos, Europa, Chile, México, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Tailandia, Malasia y Corea del Sur, entre otros países. Se están acaparando tierras en Asia, África, las Américas y Europa para la agricultura industrial, las plantaciones forestales, la minería, los proyectos de infraestructuras, los embalses, el turismo, los parques naturales, la industria, la expansión urbana y los fines militares. Pueblos indígenas y minorías étnicas están siendo expulsadas de sus territorios por fuerzas armadas, aumentando su vulnerabilidad y en algunos casos incluso resultando en su esclavización. Las falsas soluciones de mercado al cambio climático están creando nuevas formas de alienar a las comunidades locales de sus tierras y recursos naturales.

A pesar del hecho que las mujeres producen la gran mayoría de los alimentos en el mundo, y de que son responsables del bienestar familiar y comunitario, las estructuras patriarcales existentes siguen provocando que ellas se vean despojadas de las tierras que cultivan y de su derecho a los recursos. Teniendo en cuenta que la mayoría de campesinas no tienen derechos a la tierra seguros y legalmente reconocidos, están particularmente expuestas a sufrir desalojos.

La lucha contra el acaparamiento de tierras es una lucha contra el capitalismo, el neoliberalismo y contra un modelo económico destructivo. Los testimonios de nuestras hermanas y hermanos de África del Sur, Brasil, Burkina Faso, Colombia, Francia, Ghana, Guatemala, Guinea Bissau, Honduras, India, Indonesia, Malí, Mauritania, Mozambique, Nepal, Níger, República Democrática de Congo, Senegal, Tailandia y Uganda, nos mostraron cómo el acaparamiento de tierras amenaza a la agricultura familiar a pequeña escala, la naturaleza, el medio ambiente y la soberanía alimentaria. El acaparamiento de tierras desplaza y dispersa a las comunidades, destruye las economías locales y el tejido socio-cultural y pone en peligro las identidades de las comunidades, ya sean de campesinos/as, pastores/as, pescadores/as artesanales, trabajadores/as, dalits o pueblos indígenas. Los que se alzan para defender sus derechos están siendo golpeados, encarcelados y asesinados. No hay forma alguna de mitigar los impactos de este modelo económico y las estructuras de poder que lo promueven. Nuestras tierras no están en venta ni para el arriendo.

Pero no estamos vencidos. A través de la organización, la movilización y la unidad en nuestras comunidades, hemos sido capaces de parar el acaparamiento en muchos lugares. Además, nuestras sociedades reconocen cada vez más que la agricultura familiar y la producción de alimentos en pequeña escala es el modelo más sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental de usar recursos y garantizar el derecho a la alimentación para todos/as.

Recordando el Llamamiento de Dakar, reiteramos nuestro compromiso a resistir al acaparamiento de tierras con todos los medios posibles, a apoyar a todos aquellos y aquellas que luchan contra los acaparamientos de tierra y a ejercer presión sobre los gobiernos nacionales y las instituciones internacionales para que cumplan sus obligaciones con los derechos de los pueblos. Nos comprometemos específicamente a:

Organizar a las comunidades rurales y urbanas contra todas las formas de acaparamiento de tierras.

Reforzar las capacidades de nuestras comunidades y movimientos para reclamar y defender nuestros derechos, tierras y recursos.

Reclamar y asegurar los derechos de las mujeres en nuestras comunidades a la tierra y los recursos naturales.

Concientizar a la opinión pública sobre cómo el acaparamiento de tierras está causando una crisis para toda la sociedad.

Construir alianzas entre diferentes sectores y regiones, y movilizar a nuestras sociedades para detener el acaparamiento de tierras.

Fortalecer nuestros movimientos para lograr y promover la soberanía alimentaria y una auténtica reforma agraria.

Para realizar estos compromisos, vamos a desarrollar el siguiente plan de acción:

En lo relativo a la capacitación para organizar la resistencia local:

- Informar a nuestras comunidades sobre las discusiones y compromisos de esta Conferencia.
- Construir nuestras propias fuentes de información sobre acaparamiento de tierras por medio de documentación de casos, compilación de información relevante y de pruebas sobre procesos, actores, impactos del acaparamiento de tierras.
- Asegurar que nuestras comunidades reciban la información que necesitan con respecto a sus derechos, las leyes, las empresas, los contratos, etc., de manera que puedan resistir más efectivamente a los inversionistas y los gobiernos que traten de despojarlos de sus tierras.
- Establecer sistemas de alerta temprana para prevenir a las comunidades sobre los riesgos y amenazas.
- Fortalecer nuestras comunidades a través de la formación política y técnica, y recuperar nuestro orgullo de ser productores/as y proveedores/as de alimentos especialmente entre la juventud.
- Promover los derechos de las mujeres a la tierra y los recursos naturales concientizando nuestras comunidades y movimientos sobre la importancia de respetar y proteger los derechos de las mujeres a la tierra especialmente en sistemas consuetudinarios de tenencia.
- Desarrollar y usar los medios de comunicación locales para organizar a los miembros de nuestras comunidades y de otras, y compartir con ellos información sobre el acaparamiento de tierras.
- Hacer que nuestros dirigentes cumplan las normas establecidas por nuestras comunidades, y obligarlos a que rindan cuentas ante nosotros, nuestras comunidades y organizaciones.

En lo relativo a la asistencia jurídica de defensa:

- Desarrollar nuestros propios sistemas de asistencia jurídica y colaborar con expertos jurídicos y en derechos humanos
- Rechazar todas las formas de violencia y criminalización de nuestras luchas y movilizaciones por la defensa de nuestros derechos.

- Trabajar por la liberación inmediata de todas las personas encarceladas por causa de sus luchas en defensa de las tierras y los territorios; realizar urgentemente campañas de solidaridad con todas las personas que sufren conflictos.

En lo relativo a la incidencia y la movilización:

- Erigir el 17 de abril como el día global de la movilización contra el acaparamiento de tierras; identificar otras fechas adicionales de movilización para defender la tierra y los bienes comunes.
- Elaborar nuestros argumentos políticos para poner en evidencia y desacreditar el modelo económico que fomenta el acaparamiento de tierras, así como los diferentes actores e iniciativas que lo promueven e intentan legitimar.
- Establecer un Observatorio Popular sobre acaparamiento de tierra para facilitar la compilación de informaciones, comunicaciones, planes de acción, incidencia, investigación y análisis.
- Promover los derechos de las mujeres a través de programas de redistribución específicos para mujeres y otras medidas. Promover leyes y políticas que respondan a las necesidades de las mujeres.
- Construir alianzas estratégicas con la prensa y los medios de comunicación.
- Llevar nuestros mensajes y reivindicaciones a nuestros diputados, gobiernos e instituciones internacionales. Continuar involucrados en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y demandando que sus procesos, como el de las Directrices de la FAO sobre gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques contribuyan realmente a proteger y promover los derechos a la tierra y los recursos naturales de los/as proveedores/as de alimentos en pequeña escala.
- Identificar y enfatizar a nivel local, nacional e internacional los espacios para la acción, la movilización y la construcción de una amplia resistencia social al acaparamiento de tierras.
- Planear acciones de protesta contra corporaciones (incluyendo corporaciones financieras), el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo que se benefician e impulsan el acaparamiento de tierras y recursos naturales. Mantener oposición a los esquemas de auto-regulación del sector privado tales como los principios RAI del Banco Mundial.
- Expandir y fortalecer nuestras acciones para lograr y promover la soberanía alimentaria y una auténtica reforma agraria, el reconocimiento de los sistemas consuetudinarios siempre y cuando salvaguarden los derechos de las mujeres, y la realización de los derechos de los/as jóvenes a la tierra y los recursos naturales.
- Apoyar el control de los pueblos de sus recursos naturales a través de ocupaciones de tierras, ocupaciones de las empresas y corporaciones inversionistas, protestas y otras acciones de movilización de masas para reclamar sus bienes comunes.
- Exigir a nuestros gobiernos que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, que cesen inmediatamente la transferencia de tierras y recursos naturales a inversionistas empresariales, que cancelen los contratos hechos, restituyan las tierras saqueadas y protejan a las comunidades rurales y urbanas del acaparamiento actual y cualquier acaparamiento futuro.

En lo relativo a las alianzas:

- Construir redes y alianzas fuertes de organizaciones a todos los niveles - local, regional e internacional – con base en el Llamamiento de Dakar y poniendo a los/as productores/as y proveedores/as de alimentos en el centro de las alianzas.
- Forjar alianzas con miembros de los fondos de pensiones para evitar que estos fondos inviertan en proyectos que resulten en acaparamiento de tierras.
- Establecer alianzas estratégicas con la prensa y los medios para que transmitan fielmente nuestros mensajes y realidades. Refutar los prejuicios difundidos por la prensa dominante con respecto a la lucha por la tierra y la reforma agraria en Zimbabwe.

Hacemos un llamamiento a todas aquellas organizaciones comprometidas con estos principios y acciones para que se unan a nuestra Alianza Global contra el Acaparamiento de Tierras que hoy de forma solemne lanzamos aquí en Nyeleni.

¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza!

Nyeleni, noviembre 19 de 2011”

Para adherir al llamamiento visitar: <http://www.dakarappeal.org/index.php/es/>

[inicio](#)

- Desde Durban: Llamado a una moratoria a REDD+

Una vez más, los contaminadores del mundo han bloqueado toda acción real para enfrentar el cambio climático. La 17ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UN COP17) terminó en Durban con el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones (la Plataforma de Durban) destinada a establecer un nuevo régimen. Esta decisión representa un crimen contra la humanidad, dado que el hecho de posponer la acción hasta 2020 permite que la temperatura global aumente 4 grados Celsius, basándose en las promesas de reducción de las emisiones que hicieron en Cancún los países industrializados para el período 2012-2020.

A pesar de la falta de acción para llegar a un acuerdo obligatorio sobre la reducción de las emisiones, también esta vez hubo muchos esfuerzos en Durban para impulsar el sistema REDD+ como manera de avanzar.

Los pueblos indígenas que participaban en las negociaciones de la CMNUCC, organizados en la Alianza de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales contra REDD y por la Vida, han llamado a declarar una moratoria a REDD+. Subrayaron que “las fuentes de financiamiento de los créditos de carbono de REDD+ provienen del sector privado y los mercados de carbono, en los cuales están implicadas las industrias extractivas. Los mercados de carbono y REDD+ convierten nuestros territorios y bosques en una suerte de basureros de carbono, mientras los mayores responsables de la crisis climática no asumen compromisos vinculantes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y continúan generando ganancias. El mismo Banco Mundial ha informado que ‘la composición de los flujos financieros requeridos para la estabilización y adaptación climática será, a largo

plazo, principalmente del sector privado'.”

Junto con el MDL, REDD permitiría a los países industrializados “compensar 24-69% de sus emisiones... evitando así hacer las reducciones internas necesarias para que las emisiones lleguen al máximo en el entorno de 2015”, reconoció James Hansen, Director de la NASA.

La mayor parte de los bosques del mundo se encuentran en tierras y territorios de pueblos indígenas, y el grupo denuncia que REDD+ – así como el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) – promueve la privatización y la mercantilización de los bosques, los árboles y el aire a través de los mercados y los créditos de carbono, “una hipocresía que no detendrá el calentamiento global” y que podría conducir al mayor acaparamiento de tierras de todos los tiempos.

El llamado para una moratoria está basado en el principio de precaución, que dice que “cuando una actividad amenaza con perjudicar la salud humana o el medio ambiente, se debería tomar medidas de precaución aun si algunas relaciones de causa a efecto no están científicamente establecidas”. Un número creciente de informes recientes proporciona evidencia de que “los pueblos indígenas están siendo sometidos a violaciones de sus derechos como resultado de la implementación de políticas y programas de tipo REDD+, incluyendo: el derecho a la vida de los opositores a REDD, desplazamiento forzoso y reubicación involuntaria, pérdida de tierras, territorios y recursos, de soberanía y seguridad alimentaria, y la imposición del llamado ‘sustento alternativo’ que resulta en la separación de nuestra gente de sus comunidades, culturas y conocimiento tradicional. De igual forma, nuestros derechos al consentimiento libre, previo e informado, a la libre determinación y la autonomía, consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI) están siendo violados. Cabe señalar que las mismas Naciones Unidas reconocen que REDD+ podría resultar en la ‘clausura’ de los bosques”.

REDD+ no solamente perjudica a los pueblos indígenas y las comunidades locales, sino también al medio ambiente, al promover las plantaciones industriales de árboles, que pueden incluir la siembra de árboles transgénicos. Los incentivos perversos ya están reemplazando los bosques indígenas, aumentando así la deforestación.

Mientras que el carbono biótico – el que está almacenado en los bosques – no puede nunca ser equivalente al carbono fosilizado del subsuelo, el dióxido de carbono resultante de la quema de combustibles fósiles se añade a la sobrecarga del carbono que circula perpetuamente entre la atmósfera, la vegetación, los suelos y los océanos. Esta falta de equivalencia, junto con otras muchas complejidades, vuelve imposible contabilizar el carbono de REDD+, alerta la declaración.

“REDD+ está socavando el régimen climático, violando también el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas establecido bajo la Convención. Los créditos para contaminar generados por REDD+ obstaculizan la única solución viable al cambio climático: mantener el petróleo, el carbón y el gas natural en el subsuelo”, concluye la declaración.

El llamado de la Alianza de Pueblos Indígenas y Comunidades locales contra REDD y por la Vida puede ser leído en: <http://www.carbontradewatch.org/art-culos/pueblos-indigenas-hacen-un-llamado-por-una-moratoria-sobre-redd.html>.

[inicio](#)

- Mega-emprendimientos y criminalización de la lucha por derechos, el caso de India y Honduras

En este mes, en que se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, es imperioso destacar los casos de dos comunidades de países aparentemente muy distantes pero que tienen mucho en común. Tanto en Honduras como en la India, las comunidades llevan años de lucha contra el nuevo colonialismo de poderosos grupos económicos vinculados a la plantación de palma aceitera y a la extracción de hierro, respectivamente.

Basadas en un modelo industrial extractivista, en gran escala y exportador, estas empresas son responsables por la violación de derechos humanos en las comunidades donde se han instalado. La obtención de lucro está por encima de todo, y justifica cualquier medio para acallar las voces de resistencia y así lograr una producción a gran escala destinada a países con alto consumo de aceite de palma o hierro en el mercado global.

Sean nacionales o transnacionales, siderúrgicas o agrícolas, las empresas llegan con grandes promesas de desarrollo, bienestar y empleo para la comunidad, pero a corto plazo queda en evidencia la realidad de su negocio de carácter capitalista, que nada tiene que ver con las promesas realizadas ni con los intereses de las comunidades locales.

Las comunidades locales organizadas reaccionan informándose, denunciando irregularidades, reivindicando su derecho a la tierra y al territorio –su medio de vida y sustento– y resistiendo no sólo la apropiación y destrucción de ecosistemas sino además la violación de derechos humanos.

La respuesta de las empresas, ante la oposición a sus emprendimientos, no tarda en llegar. Es así que, con el respaldo del gobierno, se criminaliza a los movimientos campesinos, lo que supone amenazas, menciones en la prensa desprestigiando a los líderes locales o a las denuncias realizadas por las comunidades, prisión por causas no conocidas, juicios injustos, represión policial y/o militar, y hasta se llega al asesinato.

India: Dirigente del movimiento anti-POSCO secuestrado por la administración Orissa

La empresa coreana POSCO intenta instalar en Orissa, al este de India, una planta siderúrgica con una capacidad de producción de cuatro millones de toneladas, para lo cual necesita unas 1.500 hectáreas de tierra (ver boletines 147, 155, 157, 163 del WRM).

Del total mencionado, 1.200 hectáreas son bosques – la empresa está negociando

obtener una autorización con el gobierno de Orissa para talar esa área, para abrir espacio para la instalación de la planta-- y "apenas" 60 hectáreas --según declara el gobierno-- corresponden a terrenos privados. Lo que no se dice es que este "apenas" representa a dos comunidades donde viven más de 600 familias, las cuales serían desplazadas.

El movimiento de pescadores y campesinos de las comunidades de Dhinkia y Gobindpur lleva varios años de resistencia contra los intentos del gobierno de Orissa, así como de la multinacional POSCO, de destinar estas tierras al proyecto de extracción de hierro que incluye la construcción de una carretera de acceso al predio de la planta.

A pesar de que el gobierno dice que el programa de compra de tierras es pacífico, manifestantes y activistas sostienen que el gobierno los coacciona para que cedan, desplegando una enorme cantidad de policías en el área. Abhay Sahoo, uno de los líderes del PPSS (Movimiento de resistencia anti-POSCO) se pregunta qué es lo que tanto molesta al gobierno. Lo que las comunidades defienden es su economía basada en el betel, los peces y el arroz, que les permite asegurar el bienestar de las futuras generaciones "sin ninguno de esos proyectos que sólo prometen destruir todo nuestro entorno", declara a la agencia IPS. (Ver <http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=98519>).

Como consecuencia de la resistencia del movimiento, el activista Abhay Sahoo fue arrestado a fines de noviembre cerca del área propuesta para llevar a cabo el proyecto y se encuentra con prisión preventiva ya que la petición de fianza fue rechazada. Esto ocurre luego de que los habitantes de Dhinkia y Gobindpur resistieran heroicamente --bajo el agobiante calor del verano y por más de dos meses-- los ataques de la policía, llamando la atención de todo el país sobre la amenaza a su próspera economía y a los ecosistemas. También ocurre en el marco de las denuncias realizadas al ministerio del ambiente sobre la autorización para deforestar a favor del proyecto, la que consideran inmoral y sin el aval de la población local --alegando a una reciente propuesta de ley que exige el consentimiento del 80% de la población.

La situación empeoró en los últimos días, cuando más de 500 hombres armados -- un tipo de milicia privada - , respaldados por la policía y el gobierno, llegaron a la manifestación no violenta del PPSS donde unas 2000 personas entre hombres, mujeres y niños yacían sobre la tierra para impedir el acceso de la empresa a su zona. La milicia, con bombas y armas atacó a los manifestantes, hiriendo a no menos de ocho personas, una de ellas con lesiones graves.

Las comunidades de Dhinkia y Gobindpur necesitan de nuestra solidaridad. La represión ejercida contra el movimiento PPSS, el arresto del líder Abhay Sahooy, el ataque a la manifestación pacífica de estas dos comunidades locales deben recibir la condena de la comunidad internacional al igual que el proyecto de la empresa POSCO, que además de ser socialmente injusto y económicamente destructivo es responsable por la violación de derechos humanos en Orissa. (Acceder aquí a una carta modelo -en inglés- a ser dirigida al gobierno y a la comisión de Derechos Humanos de India <http://www.wrm.org.uy/India/letter12-2011.html>).

Honduras: llamamiento urgente de solidaridad con el Movimiento Campesino del Bajo Aguán.

El Movimiento Campesino de la zona del Bajo Aguán, al norte de Honduras, ha difundido recientemente una carta abierta en la que denuncia que “¡Es Urgente Detener la Masacre en el Bajo Aguan!”. Esta voz de alerta es a la vez un pedido de apoyo a la comunidad internacional -pueblos, gobiernos e instituciones- frente a la situación extrema en que se encuentran. (Ver <http://movimientocampesinodelaguan.blogspot.com/2011/11/llamamiento-urgente-de-solidaridad-con.html>)

Los campesinos y campesinas viven en continuo peligro, con una “presencia militar y policial fuertemente intensificada en los últimos tiempos – la misma que es señalada repetidamente por su responsabilidad en la represión”, expresa la carta.

“La gravedad del problema fue denunciada el pasado 24 de octubre, en el marco del 143º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se documentó el incremento de los asesinatos -42 asesinados/as afiliados a organizaciones campesinas entre septiembre del 2009 y octubre del 2011-, persecuciones, amenazas e intimidaciones en contra de unas 3.500 familias campesinas que reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación, y se encuentran en total indefensión frente a la criminal represión y saqueo de la oligarquía hondureña, ligada fundamentalmente a la producción de palma aceitera en esa zona y estrechamente vinculada al régimen político instaurado tras el golpe de estado de 2009. A esos asesinatos se agregan los procesos judiciales en contra de más de 160 campesinos –iniciados hasta julio del 2011-, los desalojos forzados y la destrucción de las viviendas y medios de vida de pueblos enteros.

Según informes y denuncias públicas disponibles, en el país hay más de 600 mil familias que carecen de tierra, sin que exista por parte del Estado hondureño una estrategia agraria para solventar la grave problemática social. El conflicto agrario en Honduras se polariza a raíz de la Ley de Modernización Agrícola del año 1992, que permitió rebasar los topes existentes en relación a la tenencia de la tierra, dando lugar a enormes plantaciones concentradas, en el Bajo Aguan, en manos de terratenientes como Miguel Facussé, Reynaldo Canales y René Morales Carazo.”

“Las familias campesinas exigen la tierra porque no tienen qué comer. Necesitamos sembrar nuestros alimentos y también contribuir a la economía local y nacional. El monocultivo es una de las razones que nos han llevado a este conflicto agrario y no podemos seguir reproduciendo este modelo” relata un líder campesino a un periodista de Rel-UITA. (Ver “Palma africana y derechos humanos. El agua y el aceite” en http://www.rel-uita.org/agricultura/palma_africana/index.htm)

La carta abierta dice que “mientras la muerte y el terror continúan recorriendo los campos del Bajo Aguán, y el régimen criminaliza la lucha campesina y profundiza la militarización del territorio, su titular Porfirio Lobo asegura que se avanza en el proceso de pacificación y reconciliación del país, logrando así que la Organización de Estados Americanos (OEA) y otras instancias internacionales reincorporaran al Estado de Honduras como miembro activo con plenos derechos. Asimismo dan

rienda suelta a los planes ambiciosos de inversión, endeudamiento y ocupación territorial del país a fin de profundizar el saqueo y la depredación. Lejos de alcanzar esa pacificación y reconciliación, el pueblo hondureño sufre los embates de un sistema colapsado.”

“A partir de junio de este año y con la concurrencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, los Estados Unidos y otros, bajo la justificación de una nueva Iniciativa Regional Centroamericana de Seguridad que se supone indicada para mejorar el combate al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, se está consolidando un fuerte respaldo y aprovisionamiento justamente a los sectores más implicados en el mismo. Esta nueva transnacionalización de un muy particular concepto de seguridad, siempre bajo el dominio de Estados Unidos., ya tiene muchos antecedentes en el país y la región, incluyendo el ‘capítulo de seguridad’ incorporado al NAFTA, cuyos resultados en México están a la vista. Tampoco pueden ignorarse sus vínculos con las políticas de inversión, endeudamiento y control territorial que en el Bajo Aguán y las zonas costeras Garífunas, entre otras partes de Honduras, buscan imponer sus proyectos de saqueo reverdecidos –‘energía renovable’, ‘reforestación ecológica’ y ‘turismo sustentable’ - por sobre la resistencia de las poblaciones, cuyas posibilidades de vida se ven cada vez más violentadas.”

El Movimiento Campesino solicita, entre otros temas, que: “la Organización de Estados Americanos proceda con urgencia a nombrar una Comisión de Verificación de la situación del Bajo Aguan, con apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. También exhorta a “Instituciones Financieras Internacionales, inversores y ‘donantes’ internacionales a que suspendan toda operación que afecta la zona, hasta tanto su necesidad y legitimidad sean comprobadas desde la perspectiva de los derechos de las comunidades afectadas”.

Finalizando la carta abierta, se hace especial énfasis en las exigencias a las autoridades hondureñas, quienes deben respetar los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional de: velar por los derechos humanos terminando con la criminalización de los movimientos campesinos; detener los desalojos forzosos, impidiendo el avance de la agroindustria por sobre la soberanía alimentaria y territorial y la desmilitarización de la región.

Apelamos a la solidaridad de la comunidad internacional con el pueblo hondureño y a estar alertas frente a la situación de grave peligro que se presenta en este país y especialmente en la zona del Bajo Aguan.

Estos dos casos son representativos de otros muchos que ocurren en América Latina, África y Asia, donde los responsables de implementar un modelo industrial extractivista a gran escala y de promover el consumo excesivo según las reglas del capitalismo global, responden con criminalización, represión, militarización y muerte a quienes se oponen a entregar su tierra, territorios, cultura y formas tradicionales de producción en aras de una feroz mercantilización de la naturaleza.

- Crisis de derechos humanos en plantaciones de palma aceitera de Indonesia

Un nuevo informe, publicado en noviembre de 2011, expone cómo la policía local de la provincia de Jambi, en la isla indonesia de Sumatra, trabajando con el personal de las plantaciones de palma aceitera, sistemáticamente expulsó a los habitantes de tres aldeas, disparando armas para asustarlos y usó luego maquinaria pesada para destruir sus casas y arrasar los pisos de hormigón que luego fueron arrojados en los arroyos vecinos. Esas operaciones fueron realizadas durante una semana, a mediados de agosto, y ya han desencadenado una controversia internacional. Andiko, director ejecutivo de la ONG indonesia de derechos humanos, HuMa, dijo:

Las expulsiones a punta de revólver y la destrucción de los hogares de hombres, mujeres y niños, sin preaviso y sin una orden de la corte, constituyen una grave violación de los derechos humanos y son contrarias a las normas policiales. La compañía debe ahora reparar los daños, pero también se debe investigar a los autores individuales y castigarlos como indica la ley.

Esto ocurrió en agosto de 2011, en la concesión de 20.000 hectáreas de palma aceitera de PT Asiatic Persada, una filial del Grupo Wilmar que es propietario del 51% de dicha empresa. El Grupo Wilmar de Singapur está representado en el Consejo Directivo de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés) y, además de poseer más de 600.000 ha de plantaciones en Malasia e Indonesia, tiene planes de expandirse en otros continentes, es el mayor comerciante de aceite de palma del mundo y posee plantas de procesamiento en Sumatra y Europa. Abetnego Tarigan, Director Ejecutivo de la ONG indonesia SawitWatch, que también es miembro del consejo de la RSPO, declaró:

Francamente, estamos muy decepcionados. Es de suponerse que los miembros principales de la RSPO siguen escrupulosamente los criterios acordados, que incluyen respetar los derechos consuetudinarios de los pueblos y resolver los conflictos. Las compañías afiliadas a la RSPO deberían ayudar a las comunidades, y no recurrir a tácticas represivas de otros tiempos.

Como se explica en el informe, detrás de los problemas actuales está un conflicto de larga data con las comunidades cuyas tierras fueron invadidas por la plantación de palma aceitera sin reconocer sus derechos, sin compensación y sin su consentimiento. Wilmar, que posee la plantación desde 2006, se ha negado a reconocer los derechos territoriales de las comunidades, o a ofrecerles pequeñas propiedades dentro de la concesión; en cambio, les ofreció acciones de una empresa conjunta (50/50) en una plantación de 1.000 ha situada más al oeste. Algunos miembros de la comunidad, que aceptaron ese plan, lo rechazaron luego, afirmando que les había aportado pocos beneficios y aún más conflictos.

El Forest Peoples Programme, que coordinó la investigación de campo, señala que las ONG han presentado una denuncia contra Wilmar ante la oficina Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera Internacional. Las reclamaciones previas habían logrado que el Banco Mundial suspendiera toda financiación al sector del aceite de palma en el mundo entero. Hoy en día, la CAO

está aún haciendo de mediador en las disputas entre las filiales de Wilmar y las comunidades. Sin embargo, en Jambi, esos esfuerzos fracasaron en junio de este año.

Ahora, la CAO ha aceptado volver a examinar la reclamación, y la compañía, algunos representantes de la comunidad, el gobierno local y algunas ONG locales también han estado de acuerdo en que dicho organismo mediara en el diferendo. Mientras tanto, el problema sigue sin resolver y otros activistas, impacientes ante la lentitud del proceso, llevaron sus quejas a Alemania donde, con la ayuda de ONG alemanas, manifestaron frente a las plantas de procesamiento de aceite de palma en Hamburgo. Las ONG alemanas exhortaron a la empresa Unilever, uno de los mayores consumidores de aceite de palma del mundo, a no hacer más negocios con Wilmar.

SawitWatch, la ONG indonesia que monitorea el sector del aceite de palma, identificó a través de su propia red 663 casos de conflictos territoriales entre las comunidades y las plantaciones de palma aceitera en Indonesia. Por su parte, la Agencia Nacional del Territorio del gobierno de Indonesia admitió que tenía registrados unos 3.500 casos similares.

El problema que subyace tras estos conflictos desesperados es que, a diferencia de las obligaciones internacionales de Indonesia en cuanto a los derechos humanos, las leyes nacionales apenas reconocen los derechos consuetudinarios de las comunidades rurales. Se ha titulado menos del 40% de las tierras. A pesar de que el país es el tercero del mundo en cuanto a población, el gobierno trata más del 80% del territorio nacional como propiedad estatal y, con toda liberalidad, cede tierras a las empresas forestales, mineras y de plantación, sin el consentimiento de las comunidades. Algunos estudios académicos muestran que los arreglos que ofrecen hoy a la población local las compañías de palma aceitera son peores que durante la dictadura del Presidente Suharto. Repetidas veces, los órganos del tratado sobre los derechos humanos de las Naciones Unidas han llamado la atención al gobierno indonesio sobre estos problemas, y lo han exhortado a reformar las leyes para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Sin embargo, el gobierno indonesio no ha respondido siquiera a la ONU, aparentemente ignorando su obligación de proteger los derechos de los ciudadanos.

Un estudio más amplio, de alcance regional, sobre la expansión de la palma aceitera en el Sudeste Asiático, también publicado por el Forest Peoples Programme y SawitWatch en noviembre pasado, muestra que, cuando los derechos comunitarios están mal protegidos y las leyes poco aplicadas, la palma aceitera sigue expandiéndose por medio del acaparamiento de grandes extensiones, provocando conflictos, represión y más violaciones de los derechos humanos. El mismo patrón se reproduce en Camboya, Filipinas, Indonesia, Malasia e incluso Papúa Nueva Guinea. Por el contrario, cuando las tierras de los agricultores son más seguras, como sucede en las tierras bajas de Tailandia, los pequeños propietarios eligen qué cultivar y pueden comerciar sus productos independientemente, aplicando sus propios términos, con lo cual la gente del lugar obtiene mejores resultados. El estudio muestra también que esa expansión en el

Sudeste Asiático se debe no sólo a la demanda mundial de aceite de palma, que está aumentando exponencialmente, sino también a las políticas nacionales de desarrollo de ese cultivo para el mercado local, para ahorrar divisas y fomentar la seguridad energética.

En diciembre, la Comisión Indonesia de Derechos Humanos convocó a una reunión regional de las comisiones nacionales sobre derechos humanos del Sudeste Asiático, KOMNASHAM, con el fin de estudiar esos problemas. De esa reunión salió la “*Declaración de Bali sobre los Derechos Humanos y la Agroindustria*”, que exhorta a los Estados de la región a garantizar los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, en especial el derecho a la alimentación, y a establecer marcos más estrictos que obliguen a las compañías a respetar los derechos humanos.

Enlaces:

Para obtener copias del nuevo informe sobre violaciones de derechos humanos en Jambi, Indonesia, ver:

<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/final-report-pt-ap-nov-2011-low-res-1.pdf>.

Por información detallada sobre los problemas en materia de derechos humanos en el sector del aceite de palma, ver:

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/palmoilindigenoupeoplesoutheastasiafinalmceng_0.pdf.

Para ver el nuevo informe sobre la expansión del aceite de palma en el sudeste asiático: <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/11/oil-palm-expansion-southeast-asia-2011-low-res.pdf>.

Para ver la Declaración de Bali, ver:

<http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2011/12/final-bali-declaration-adopted-1-dec-2011.pdf>.

Por información sobre la acción de protesta en Alemania, ver:

<http://www.regenwald.org/news/palmoel/3933/tagliche-news-zu-dem-indonesier-besuch-die-indonesier-in-deutschland>.

Este artículo fue compilado por Marcus Colchester, del Forest Peoples Programme, <http://www.forestpeoples.org/>

[inicio](#)

- El clima, los derechos humanos y los bosques en Tailandia

La aplicación de la política nacional en materia de REDD+ en Tailandia representa para las comunidades indígenas una grave violación de sus derechos humanos. Con el argumento de que contribuyen a la crisis climática porque deforestan, destruyen los recursos naturales y causan incendios forestales - actividades todas que provocan emisiones de carbono -, las comunidades viven la amenaza

constante de ser expulsadas de sus territorios tradicionales. Por otro lado, este tipo de análisis usado como base para la formulación de las políticas no suele contemplar la consulta a las comunidades.

Para cuestionar esa visión y esas políticas, se realizó un estudio con la comunidad indígena Karen de HuayHin Lad del distrito de Wieng Pa Pao, provincia de Chiang Rai, comunidad amenazada de expulsión porque se ubica en un parque nacional. Se estudió su manera tradicional de relacionarse con el bosque y de utilizarlo, y también el potencial y la capacidad de los bosques comunitarios de absorber gases de efecto invernadero, comparados con las emisiones de dichos gases debidas a las actividades de la comunidad.

La conclusión del estudio fue que el estilo de vida y la agricultura de los pueblos de las montañas tailandesas no sólo no influyen negativamente sobre el cambio climático, sino que “las prácticas tradicionales de subsistencia de esos pueblos ayudan a equilibrar el sistema ecológico, a mitigar efectivamente los impactos adversos del cambio climático y a mantener una seguridad alimentaria duradera”.

El estudio mostró que el método de agricultura itinerante de la comunidad causa pocas emisiones de carbono, porque es un sistema autosuficiente, que requiere un gasto mínimo porque no usa ningún producto químico, y que garantiza la seguridad alimentaria de la comunidad durante todo el año gracias a los múltiples períodos de cosecha. La comunidad prefiere alimentos producidos localmente, en lugar de comprar alimentos industrialmente procesados. Todo esto contribuye a que su huella ecológica sea muy escasa, y el resultado es que las emisiones anuales de carbono de la comunidad representan sólo el 0,08% del carbono almacenado en la zona que ocupa.

Otro factor importante, que influye en la manera de tratar el bosque, es que la utilización de los recursos naturales y el consumo de alimentos de la comunidad se guían por su manera tradicional de relacionarse con el medio ambiente, basada en creencias, conocimiento y normas colectivamente establecidas. Por ejemplo, cortar un árbol es una tarea decidida en común y pautaada por diversas reglas.

Las conclusiones del estudio reafirman la necesidad de respetar el derecho de los pueblos de montaña a la gestión sostenible de los recursos naturales, como está previsto por la constitución tailandesa. Y además, el estudio muestra cuán necesario es que los pueblos indígenas sean consultados y puedan participar plenamente en la formulación de las políticas relativas al cambio climático.

Este interesante estudio muestra también que la gente y los gobiernos tienen mucho para aprender de ésta y otras comunidades de las zonas de bosque tropical del mundo entero, sobre el uso responsable de los recursos naturales y sobre cómo vivir bien y en armonía con dichos recursos sin causar impactos negativos sobre el clima y el ambiente en general. Los resultados del estudio de caso también son un mensaje claro para quienes definen las políticas en Tailandia y en muchos otros países de bosque tropical: no hay que sacar a los habitantes de los bosques, porque no son responsables de la destrucción de éstos; por el contrario, son actores clave en la lucha por conservarlos.

Basado en: "Climate Change, Trees and Livelihood: A case study on the carbon footprint of a Karen Community in Northern Thailand," redactado por la Northern Development Foundation y la comunidad de HuayHin Lad.

(http://ccmin.aippnet.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350&Itemid=159)

[inicio](#)

NOTICIAS BREVES

- Denuncia contra el fondo de pensiones holandés ABP por invertir en monocultivos de árboles en Mozambique

El 3 de diciembre de 2011, un artículo publicado en primera página por el periódico holandés Volkskrant denunciaba que el fondo de pensiones de ese mismo país, ABP, uno de los mayores del mundo, a través del Fondo Forestal Mundial de Solidaridad (Global Solidarity Forest Fund, GSFF), una iniciativa de iglesias suecas y noruegas, estaba invirtiendo dinero en un proyecto de monocultivo de pinos y eucaliptos en Mozambique, que está afectando negativamente a las comunidades campesinas (ver publicación realizada por el WRM en 2010: www.wrm.org.uy/paises/Mozambique/livro.pdf).

En ese reciente artículo, la Unión Provincial de Campesinos de Niassa afirma: "No comprendemos por qué las instituciones eclesiósticas y otros fondos de inversión están poniendo dinero en proyectos que explotan a los más pobres entre los pobres".

ABP admite que hay problemas, pero afirma que la gestión ha cambiado recientemente y que las cosas están mejorando. De más está decir que seguiremos supervisando, junto con la Unión Nacional de Campesinos (UNAC) de Mozambique, que es miembro de La Vía Campesina, la evolución de la situación en el actual contexto de creciente acaparamiento de tierras africanas por parte de empresas extranjeras y fondos de inversión.

En Mozambique, cerca del 80% de la población vive de la agricultura, y los campesinos reciben muy poco apoyo para mejorar su seguridad y soberanía alimentarias. La expansión de las plantaciones de árboles en tierras agrícolas vuelve aún más difícil la vida para las comunidades rurales, y provoca por lo tanto la fuerte oposición de dichas comunidades.

[inicio](#)

- Desgracia anunciada para el Extremo Sur, el Sur y el Sudoeste de Bahía

El gobernador Jacques Wagner y el secretario de Medio Ambiente preparan, para el 21 de diciembre, un REGALO ESPECIAL DE NAVIDAD para la sociedad del Extremo Sur, Sur y Sudoeste de Bahía. Ya circula la noticia de que, independientemente del análisis técnico del EIA/Rima [Estudio e Informe de

Impacto Ambiental], se autorizará el permiso de ampliación de Veracel Celulose. Aunque el EIA/Rima presente varios errores, ello no será un problema. Aunque la sociedad diga NO a la expansión de la empresa mediante audiencias públicas, solo se necesita la firma del secretario, Señor Eugênio Spengler.

Innumerables errores, ya sean ortográficos, de redacción, metodológicos o conceptuales, caracterizan al RIMA VERACEL II. La justificación del uso de un lenguaje simple, exigido en cualquier RIMA, parece autorizar omisiones, graves imprecisiones, términos vagos y genéricos. Más de 100 páginas se destinan al análisis de tablas y gráficas sobre datos de las localidades del área de influencia del proyecto. Los técnicos abandonan deliberadamente el análisis del proyecto en sí y sus relaciones con el territorio y presentan listas de datos agropecuarios, demográficos y educativos de las 17 localidades que componen el área de influencia directa del proyecto. Sólo en la parte final, en las últimas 25 páginas, los técnicos describen, de forma resumida y precaria, los impactos del proyecto y algunas medidas de mitigación.

Impresiona la postura claramente panfletaria del estudio . Por ejemplo, frases como: “*Veracel usa tecnología a favor del medio ambiente*” o su objetivo es la “*sustentabilidad del emprendimiento*” atraviesan todo el informe, a tal punto que este RIMA se parece más a un informe anual de sustentabilidad de la empresa o a una elaborada pieza de *Marketing* .

De esta forma, el destino ya está trazado para los pequeños agricultores, trabajadores rurales sin tierra, comunidades tradicionales, etc. No se analizan los conflictos existentes ni los que seguramente ocurrirán. Vamos a seguir el rumbo marcado por el “desarrollo” basado en la explotación de los recursos naturales y de las personas, a comprometer la seguridad alimentaria, a negar los derechos humanos de grupos y comunidades. Para el gobierno de Bahía; lo importante es asegurar ganancias al pequeño grupo accionario, como BNDES, Aracruz Celulose (actual Fibria) y Stora Enso!

8 de diciembre de 2011

Foro Socioambiental del Extremo Sur, Sur y Sudoeste de Bahía

[inicio](#)

- Llamado a la movilización y coordinación de las luchas camino a Río+20 y más allá

Del 18 al 23 de junio de 2012, en Río de Janeiro, Brasil, tendrá lugar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable (Rio+20), conmemorando los 20 años de la histórica Cumbre de la Tierra, o Río'92.

Fue a partir de esta conferencia histórica que comenzó la lucha para que los países industrializados asumiesen su responsabilidad, también histórica, por el cambio climático, resultando más tarde en las luchas populares por el reconocimiento de la deuda ecológica y climática por parte de los países industrializados del Norte con

relación al Sur, invirtiendo la lógica vigente de las deudas - financieras - que los gobiernos del Sur tenían con los países del Norte y las instituciones financieras dominados por ellos.

No obstante, comenzó también un proceso acelerado de mercantilización de la vida y la naturaleza, a través de las falsas soluciones tanto al cambio climático - bajo la forma de los mercados de carbono - como a la pérdida de la biodiversidad - bajo la forma de los llamados mecanismos financieros innovadores.

“Ante esta realidad, precisamos convertir Río+20 en un proceso mundial de fuerte movilización, que confronte la realidad de un sistema de muerte que busca perpetuarse a cualquier costo y fortalezca las luchas y resistencias por nuestra supervivencia a través de la construcción de alternativas no-capitalistas como la soberanía alimentaria”, expresan organizaciones, redes y movimientos sociales implicados en la construcción de la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y la naturaleza y en defensa de los bienes comunes, que se realizará en simultáneo y en la misma ciudad que la Conferencia Río+20.

Las organizaciones convocan “a los pueblos y movimientos en lucha contra todas las formas de explotación, depredación y dominación, a unirse con nosotros en una Asamblea permanente de los Pueblos, donde afirmaremos nuestros derechos y los de la Naturaleza frente a la mercantilización de la vida y el "reverdecimiento" del capitalismo, sobre la retórica de la "economía verde" y “para asegurar que Río+20 se convierta en una gran movilización popular que fortalezca las bases locales, regionales y mundiales necesarias para enfrentar la avanzada verde del capitalismo”.

Para sumarse a la iniciativa, comunicarse a través de: movilizacion.rio20@gmail.com. El texto completo de la convocatoria puede leerse en http://wrm.org.uy/RIO+20/Nos_movilizamos.html

[inicio](#)

- El proyecto piloto REDD de Conservation International: una producción inédita de Disney

En agosto de este año, en el Boletín No 169 del WRM, expusimos el caso de un proyecto piloto REDD (Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques) en la República Democrática del Congo (RDC). El proyecto, que se desarrolla en las reservas naturales de Tayna y Kisimba-Ikobo, es promovido por la organización Conservación Internacional (CI) y financiado por la empresa Walt Disney.

El WRM decidió realizar un estudio para conocer los impactos del proyecto, buscando escuchar y dar voz a representantes de las comunidades locales y de otras organizaciones involucradas, con el fin de contribuir al debate sobre REDD en el ámbito local y nacional en la RDC, así como internacionalmente.

El resultado de dicho estudio, que fue publicado originalmente en francés e inglés, acaba de ser traducido al castellano y puede leerse en http://www.wrm.org.uy/countries/Congo/REDD_DRC_sp.pdf

[inicio](#)

- Bosques. Mucho más que una gran cantidad de árboles

En el marco de la campaña “Definamos al bosque por su verdadero significado”, lanzamos la versión subtitulada al español del video titulado “Bosques. Mucho más que una gran cantidad de árboles”, que recoge testimonios acerca de lo que el bosque significa para los pueblos que viven con él. Para esas comunidades, un bosque es mucho más que simplemente una gran cantidad de árboles. Pero siguiendo la definición de "bosque" que da la FAO, gobiernos y corporaciones están reemplazando bosques con monocultivos de árboles a gran escala, destruyendo no solo los bosques sino los modos de vida de las comunidades que los habitan.

Los invitamos a ver el video aquí: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qNGbHYGUR-4.

Los invitamos también a difundirlo y compartirlo en sus redes sociales y a visitar la sección especial de nuestro sitio web dedicada a esta campaña: <http://www.wrm.org.uy/bosques.html>

[inicio](#)
